

**CONTESTACIÓN DE DEMANDA R: 2023-00208-00**

DANIEL FELIPE PARDO ROJAS <daniel.pardo@minjusticia.gov.co>

Lun 14/08/2023 1:56 PM

Para: Juzgado 01 Administrativo - Valle Del Cauca - Buenaventura

<j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: abelen@minjusticia.gov.co <abelen@minjusticia.gov.co>

📎 3 archivos adjuntos (748 KB)

CONTESTACIÓN R 2023-00208-00.pdf; PODER R 2023-208-00.pdf; Soportes Director Juridico.pdf;

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023

Honorable juez,

**SARA HELEN PALACIOS**

**JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA**

j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Buenaventura, Valle del Cauca.

**RADICADO:** 76-109-33-33-001-2023-00208-00

**DEMANDANTE:** PIEDAD MAGALI CORTES YVOTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS.

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**DANIEL FELIPE PARDO ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.635.228 y T.P. No. 311.816 del C.S.J.; en mi calidad de apoderado judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme el poder y anexos que adjunto a este correo, me permito presentar en el termino legalmente establecido CONTESTACIÓN DE DEMANDA en el asunto de la referencia.

Gracias por su atención.



**Daniel Felipe Pardo Rojas**

Profesional Especializado

Dirección Jurídica - Defensa Jurídica

daniel.pardo@minjusticia.gov.co

Telefono: +57 1 4443100 Ext. 1506

Sede Chapinero: Calle 53 No. 13 - 27

[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. El Ministerio de Justicia y del Derecho no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.Par

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023

Honorable juez,

**SARA HELEN PALACIOS**

**JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA**

j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Buenaventura, Valle del Cauca.

**RADICADO:** 76-109-33-33-001-2023-00208-00

**DEMANDANTE:** PIEDAD MAGALI CORTES YVOTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS.

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**DANIEL FELIPE PARDO ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.635.228 de Bogotá D.C. y Tarjeta profesional No. 311.816, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando según poder conferido por el Doctor OSCAR MAURICIO CEBALLOS MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.890.577 de Armenia, en condición de Director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con la Resolución de nombramiento No. 1815 del 30 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión 0094 del 03 de octubre de 2022, en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0679 del 05 de septiembre de 2017; dentro del término legal establecido, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** del proceso de la referencia en los siguientes términos:

## **I. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES**

Respecto de las pretensiones incoadas por la parte demandante, La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho se **OPONE** a todas y cada una de ellas, conforme con los fundamentos jurídicos que se expondrán en la presente contestación.

## **II. RESPECTO DE LOS HECHOS.**

**PRIMERO: NO ME CONSTA**, toda vez que el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene conocimiento alguno de los negocios inmobiliarios de la demandante, ni tampoco de los efectuados sobre los inmuebles mencionados, lo anterior sin perjuicio de lo que resulte probado en el proceso

**SEGUNDO: NO ME CONSTAN** los cambios de domicilio o residencia de la demandante, salvo lo que resulte probado en el proceso.

**TERCERO Y CUARTO: NO ME CONSTAN** las circunstancias en las que fue conferido el poder referido, como tampoco los mecanismos y procesos de autenticación usados por la Notaría Segunda del Circuito de Buenaventura, toda vez que los mismos son responsabilidad única y exclusivamente de la misma.

**QUINTO: NO ME CONSTA**, toda vez que resulta ajeno a la función de esta cartera Ministerial las circunstancias, documentos o procesos por medio de los cuales se efectuó la venta de los bienes inmuebles referenciados por los demandantes, máxime cuando son otras entidades sin ninguna relación jerárquica con el Ministerio de Justicia, las encargadas de las funciones notariales y registrales.

**SEXTO: NO ME CONSTA** la forma en la que se efectuó la venta de los referidos bienes por los motivos ya expuestos anteriormente.

**SÉPTIMO: NO ME CONSTA** en la medida en que es ajeno a la entidad que represento la forma en la que realizó el mencionado avalúo, así como escapa a nuestro conocimiento la situación patrimonial de la demandante.

**OCTAVO: NO ME CONSTA**, dado que se refiere a una actuación por parte de la parte demandante ante un organismo que no tiene relación de subordinación o dependencia con esta cartera Ministerial, por lo que me atengo a lo que resulte probado en el proceso.

**NOVENO: NO ES UN HECHO.**

**DECIMO: CIERTO.**

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **EXCEPCIONES**

#### **1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA**

Primeramente, se debe mencionar que, si bien los demandantes encauzan sus pretensiones contra este Ministerio, lo cierto es que de un examen apenas superficial de los hechos fundamento de la demanda, se deduce de cada uno de ellos que esta entidad **no tuvo incidencia directa en ninguna de las actuaciones que presuntamente ocasionaron los supuestos prejuicios a los demandantes**, ello en la medida en que se identifica plenamente la participación de entidades que no solo pertenecen a otras ramas del poder público, sino que también cuentan con personería jurídica propia, autonomía e independencia, lo que conlleva a que se adolezca de cualquier vínculo de subordinación o dependencia de este ministerio y por lo tanto de algún tipo de responsabilidad atribuible por sus actuaciones.

En ese sentido y tal como se aprecia en el libelo de la demanda, los fundamentos concretos de hecho que expone la parte actora como sustento de sus pretensiones tienen que ver en esencia, con un eventual error notarial realizado por la señora Notaria Segunda del Circuito de Buenaventura al presuntamente omitir la verificación de la huella dactilar por medios electrónicos de quienes se identificaron como Luis Ángel Castillo y Piedad Magali Cortes en la suscripción del poder mediante el cual se realizó la venta fraudulenta de un bien propiedad de la ahora demandante; situación fáctica que *per se* recae dentro de los linderos de quienes prestaron la función notarial (Notarios 05 y 11 de Bucaramanga) y no dentro de los límites funcionales del Ministerio de Justicia y del Derecho.

En cuanto hace con el Ministerio de Justicia y del Derecho es claro que ésta entidad debe ser absuelta toda vez que dentro de sus competencias legales no se encuentra ninguna relacionada concretamente con la prestación del servicio público notarial, siendo así que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de Colombia y desde mucho antes, el Estado como garante de la función pública notarial la ha delegado en cabeza de los Notarios, *verbi gratia*, mediante la Ley 29 de 1973 y los decretos leyes 960 de 1970; 2148 de 1983; 902, 999 y 2.668 de 1988; 1.555, 1.556, 1.557, 1.712 y 1.729 de 1989; 2.051 de 1991, etc., en lo pertinente.

En este orden de ideas, la responsabilidad generada por la prestación del servicio público notarial recae en cabeza de los propios notarios de conformidad con lo señalado en los artículos 195 a 197 del Decreto Ley 960 de 1970, así:

*“ARTICULO 195. <RESPONSABILIDAD CIVIL>. Los Notarios son responsables civilmente de los daños y perjuicios que causen a los usuarios del servicio por culpa o dolo de la prestación del mismo.*

*ARTICULO 196. <RESPONSABILIDAD CIVIL MONTO>. Cuando se trate de irregularidades que le sean imputables, el Notario responderá de los daños causados siempre que aquellas sean subsanables a su costa por los medios y en los casos previstos en el presente Decreto.*

*ARTICULO 197. <INDEMNIZACIÓN>. La indemnización que tuviere que pagar el Notario por causas que aprovechen a otra persona, podrá ser repetida contra ésta hasta concurrencia del monto del provecho que reciba y si éste se hubiere producido con malicia o dolo de ella, el Notario será resarcido de todo perjuicio”.*

De igual forma es necesario precisar que, cómo consecuencia de la separación de funciones que caracteriza a los diferentes órganos y servidores de la administración pública, tal y como lo señala el artículo 113 de la Carta Política en concordancia con lo dispuesto en los artículos 121 y 123 *ibídem* y en la Ley 489 de 1998; es la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad con personería jurídica propia y

autonomía, la encargada de ejercer el debido control y vigilancia de las funciones desempeñadas por los notarios y las oficinas de registro de instrumentos públicos, por lo que en sana lógica jurídica se impondrá la absolución del Ministerio de Justicia y del Derecho en tanto y por cuanto la prestación del servicio público notarial corresponde directamente a los notarios y, por tanto, este despacho ministerial no tiene el deber legal de responder por las actuaciones de aquellos ni por las de ésta.

Sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva, presupuesto necesario de la sentencia favorable, ha dicho lo siguiente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 11001032600019971350300; citando una sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), Consejera ponente Dra., María Elena Giraldo Gómez, expediente 13.356, de la propia Sección Tercera:

*“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”.*

## **2. IMPROCEDENCIA DE ATRIBUIRLE RESPONSABILIDAD AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO POR VÍA DE LA ADSCRIPCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.**

El Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene legitimación material en la causa por pasiva para responder de fondo sobre los hechos y eventuales perjuicios causados, toda vez que no existe relación real entre la entidad y el supuesto daño antijurídico, sufrido por la señora PIEDAD MAGALI CORTES, con ocasión de las presuntas fallas en el servicio cometidas por la Superintendencia de Notariado y Registro y la Notaría Segunda del Circuito de Buenaventura; las cuales en su consideración, derivaron en equívocos y errores por los cuales se realizó la compra fraudulenta de un inmueble propiedad de la ahora demandante.

En ese sentido será necesario exponer el marco funcional de este ministerio para hacer claridad sobre sus responsabilidades y obligaciones legales:

### **Marco funcional de Ministerio de Justicia y del Derecho.**

El Ministerio de Justicia y del Derecho según disposición constitucional (artículo 115) conforma el Gobierno Nacional y hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

El artículo 2 del Decreto 2897 de 2011 modificado por el Decreto 1427 de 2017 establece las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, allí se evidencia que **no tiene asignadas funciones notariales, registrales o relacionadas con la supervisión y vigilancia de los notarios.**

Por lo anterior, es claro que procederá la desvinculación o absolución de mi representada, por cuanto ésta no fue la autoridad que intervino material y sustancialmente en los hechos u omisiones que, eventualmente, pudieron haber causado daños y perjuicios a los demandantes, máxime cuando cualquier deficiencia en las actuaciones y decisiones realizadas o proferidas por las Notarias del Circuito de Buenaventura, obedece a su propia responsabilidad en los términos de la normatividad expuesta con anterioridad.

De igual manera, es claro que esta entidad debe ser absuelta toda vez que, dentro de sus competencias legales no se encuentra ninguna relacionada concretamente con la función notarial o con la vigilancia y supervisión de esta; razón por la cual mal pudo haber realizado acciones u omisiones que produjeran la vulneración de los derechos e intereses del convocante.

En tratándose de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, la entidad competente es la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad pública creada por la Ley 1ª de 1962, de carácter descentralizado y técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa financiera y patrimonial, según lo señala el Decreto 412 de 2007.

En efecto, para la fecha de los hechos el artículo 26 del Decreto 412/07 señalaba taxativa y expresamente que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos eran dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, de tal manera que de suyo cualesquier actuación de aquellas involucraba a la; siendo preciso señalar que en la actualidad ello sigue siendo así de conformidad con lo señalado en el artículo 12 del Decreto 2723 de 2014 que igualmente incluye a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos dentro de la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro, y no del Ministerio de Justicia y del Derecho.



Sin perjuicio de los anteriores argumentos que por sí solos imponen la absolución del Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, me permito señalar las razones que jurídicamente hacen improcedente relacionar, por vía de la figura de la adscripción administrativa, a la entidad que represento con los hechos eficientes materia del litigio que nos ocupa.

1. La adscripción de la SNR al Ministerio del Interior y de Justicia no constituye ninguna clase de relación jerárquica funcional ni de subordinación entre una entidad y otra, toda vez que dicha figura hace relación a la orientación y controles sectorial y administrativo tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio subordinado de facultades y competencias por parte de los entes adscritos.

2. El artículo 44 de la Ley 489 de 1998 establece que la “... *orientación del ejercicio de las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un Sector Administrativo está a cargo del Ministro o Director del Departamento Administrativo a cuyo despacho se encuentren adscritos o vinculados, sin perjuicio de las potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de reestructuración, les correspondan*”.

3. El artículo 104 de la Ley 489 de 1998 establece que el “... *control administrativo que de acuerdo con la ley corresponde a los ministros... se orientará a constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales...*”.

4. A su turno, el artículo 105 *ibídem*, señala que el “... *control administrativo sobre las entidades descentralizadas no comprenderá la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley compete expedir a los órganos internos de esos organismos y entidades...*”.

5. De conformidad con lo anterior, es claro que el control administrativo que los ministros deben ejercer sobre las entidades adscritas a su cartera, tiende a fomentar el cumplimiento mancomunado de metas, planes y programas gubernamentales, excluyendo *per se* la posibilidad de limitar o condicionar la autonomía administrativa que el correspondiente acto de creación les confirió y que, naturalmente, incluye la facultad libre e independiente de actuación relacionada con el cumplimiento de sus funciones, en este caso, asuntos registrales.

Sobre este particular la Corte Constitucional en Sentencia C-046 de 2004 señaló:

*“... dentro de la competencia del legislador de determinar la estructura de la administración, se encuentra la de adscribir una entidad nacional en un Ministerio con el que guarde afinidad, salvo que existiere disposición constitucional que indique a cuál debe adscribirse o vincularse; que la decisión de adscripción no*

*implica que el órgano adscrito deba permanecer a perpetuidad en el órgano al que se adscribe, pues, si las circunstancias cambian, por ejemplo, que desaparezca el Ministerio, o que se le asignen nuevas funciones, etc., estos hechos obligan al legislador a realizar los cambios pertinentes; y, que decisiones tanto de vincular o de adscribir una entidad a otra, es el resultado del debido entendimiento del artículo 113 de la Carta en lo que concierne a las funciones separadas de los órganos del Estado pero con la colaboración armónica, encaminada a lograr sus fines...”.*

6. Respecto de la falta de relación jerárquica derivada de la adscripción de las entidades descentralizadas a los diferentes ministerios y departamentos administrativos, cabe traer a colación la sentencia proferida por el **Consejo de Estado, Sección Tercera, el 20 de febrero de 2020 M.P. Marta Nubia Velásquez, Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01776-01(52750), en la cual de forma muy clara expone:**

*[E]l Estado, si bien defirió la prestación del servicio de notariado en los particulares, no es menos cierto que lo hizo bajo el argumento de que ellos debían actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico, para lo cual le asignó a la Superintendencia de Notariado y Registro las funciones de velar porque la actividad se desarrolle de manera “eficaz”, de ahí que, si ello no se cumple, será esta entidad la que deba asumir los riesgos derivados de la función. (...) Así las cosas, **la Superintendencia de Notariado y Registro no solo tiene a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control en torno a la materia, sino que le corresponde adelantar todas “las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del servicio público notarial y registral”, para lo cual debe impartir instrucciones, fijar estándares de calidad, realizar visitas periódicas, suspender actuaciones irregulares,** así como establecer sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio, entre otras. (...) **Si bien el Ministerio de Justicia y del Derecho para la fecha de los hechos tenía a su cargo las políticas públicas en los asuntos notariales, no es menos cierto que dentro de sus competencias no se encuentra ninguna que de manera directa interfiera en el desempeño de las funciones de los notarios, razón por la cual, la falla que se invoca en el presente asunto no le resulta atribuible,** lo que resulta suficiente para confirmar la decisión por medio de la cual el a quo declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva. (...) En suma, la Sala comparte los argumentos del a quo, en cuanto **la entidad llamada a indemnizar los perjuicios causados era la Superintendencia de Notariado y Registro, pues, se enfatiza, era la encargada de que el servicio se prestara de manera idónea, entidad que no fue demandada en este asunto.***



7. En consecuencia, dejando en claro que la Superintendencia de Notariado y Registro no es una entidad subordinada jerárquicamente al Ministerio de Justicia y del Derecho; es evidente que no hay lugar a derivar responsabilidad a la cartera ministerial que represento por cualesquiera eventuales errores cometidos por las Notaria Séptima y Catorce del Circuito de Cali o de la Superintendencia de Notariado y Registro en su función de vigilancia.

### III. EXCEPCIONES

Conforme a lo expuesto anteriormente, se formula la excepción de **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA** respecto al Ministerio de Justicia y del Derecho, dada la falta de participación material o legal en los hechos que se le imputan y que eventualmente corresponden a acciones de otros organismos completamente independientes y autónomos a esta cartera.

### IV. SOLICITUD

En consecuencia, respetuosamente solicito:

- i) Proferir fallo favorable al Ministerio de Justicia y del Derecho por concurrir frente a él la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no participó en ninguno de los hechos narrados por el demandante ni tiene asignado dentro de su marco funcional establecido en el Decreto 2897 de 2011 modificado por el Decreto 1427 de 2017.

### V. PRUEBAS

Por no haber intervenido el Ministerio de Justicia y del Derecho en ninguno de los hechos de la demanda y por corresponder los argumentos de defensa a temas de puro derecho no se acompañan a la contestación pruebas adicionales.

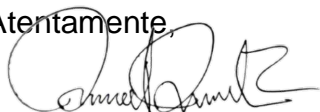
## VI. ANEXOS

1. Poder para actuar debidamente otorgado al suscrito por el Director Jurídico.
2. Copia de la Resolución de nombramiento del Director Jurídico.
3. Copia del acta de posesión del Jefe del Director Jurídico
4. Copia de la Resolución mediante la cual se delega la representación judicial de la Entidad en el Director Jurídico.

## IX. NOTIFICACIONES

Tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como el suscrito, recibiremos notificación por correo electrónico en la siguiente dirección [notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co). – [daniel.pardo@minjusticia.gov.co](mailto:daniel.pardo@minjusticia.gov.co)  
Dirección física Calle 53 No. 13-27. Teléfono 4443100 Ext 1506. Celular apoderado 3114482971.

Atentamente,



**DANIEL FELIPE PARDO ROJAS**

C.C. 1.030.635.228 de Bogotá D.C.

T. P. 311.816 del C. S. de la J.



Al responder cite este número  
MJD-OFI23-0026093-GDJ-10400

Bogotá D.C., 17 de julio de 2023

Honorable Juez,  
**SARA HELEN PALACIOS**  
**JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA**  
j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Buenaventura, Valle Del Cauca.



**RADICADO:** 76-109-33-33-001-2023-00208-00  
**SOLICITANTE:** PIEDAD MAGALI CORTES Y  
OTROS  
**CONVOCADO:** NACIÓN – MINISTERIO DE  
JUSTICIA Y OTROS.  
**ASUNTO:** PODER

Contraseña:ci7YH29ss2

**OSCAR MAURICIO CEBALLOS MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.890.577 de Armenia, en mi condición de Director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con la Resolución de Nombramiento No. 1815 del 30 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión 0094 del 03 de octubre de 2022; teniendo en cuenta que el proceso relacionado en el asunto debe ser adelantado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en razón a la entrega realizada a esta cartera ministerial por parte de la Comisión de la Verdad, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1776 de 2022; confiero PODER especial, amplio y suficiente al abogado **DANIEL FELIPE PARDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.030.635.228 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 311.816 del C.S. de la J., para que represente los intereses de la Nación dentro de la actuación relacionada.

El apoderado queda facultado para realizar las actuaciones conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y particularmente las de sustituir, reasumir, transigir y conciliar. Solicito a usted reconocerle personería. El correo electrónico del apoderado en el Registro Nacional de Abogados es [daniel.pardo@minjusticia.gov.co](mailto:daniel.pardo@minjusticia.gov.co).

Cordialmente,

*Oscar Mauricio Ceballos M.*

**OSCAR MAURICIO CEBALLOS MARTÍNEZ**  
Director Jurídico  
DIRECCIÓN JURÍDICA

Acepto,   
**DANIEL FELIPE PARDO ROJAS**  
C.C. 1.030.635.228  
T.P. 311.816 del C.S. de la J

<https://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=IBc2UcYeAEqq6fSCSv06NqVTsZVtnb8XuW%2FhRRFh8BE%3D&cod=x2sh8TG6xTiRH2AKcjZanw%3D%3D>



Este documento fue generado mediante mensaje de datos y cuenta con plena validez jurídica conforme a lo dispuesto en: la Ley 527/99, el inciso 5 del artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022. El documento puede ser validado en la siguiente URL ingresando el radicado y la contraseña que se informa en el encabezado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO **0679** DE 05 SEP 2017

*"Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones"*

**EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1427 de 2017 y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto 1427 de 2017, "[p]or el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho" dispone en su artículo 8 que son funciones de la Dirección Jurídica:

- (i) "[r]epresentar judicial y extrajudicialmente al Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, mediante poder o delegación recibidos del Ministro, así como supervisar el trámite de los mismos";
- (ii) "[r]epresentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de interviniente, en los procesos judiciales de extinción de dominio en defensa del interés jurídico de la nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento, así como hacer seguimiento y ejecutar los actos procesales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia" y,
- (iii) "[d]irigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso de los derechos de crédito que a su favor tenga el Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con la normatividad vigente".

Que en desarrollo de los principios de economía y celeridad, para hacer más ágil la actuación del Ministerio de Justicia y del Derecho ante las instancias judiciales, representarlo en los procesos judiciales de extinción de dominio, en los que actúe en calidad de interviniente, así como el cobro de los créditos exigibles a su favor, resulta necesario delegar la facultad de adelantar algunas actuaciones.

Que en mérito de lo expuesto;

Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones"

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 la representación judicial en los procesos de tal naturaleza en los cuales deba actuar la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho.

**Parágrafo.** La delegación señalada en este artículo comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos, conciliar prejudicial y judicialmente en los procesos a que haya lugar, de conformidad con las normas que rigen la conciliación en materia administrativa, especialmente las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009 y las normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.

**Artículo 2.-** Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 la representación judicial de esta cartera ministerial, en calidad de interviniente, en los procesos judiciales de extinción de dominio, en los cuales deba actuar.

**Parágrafo.** La delegación señalada en este artículo comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial en calidad de interviniente en los procesos de extinción de dominio, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.

**Artículo 3.-** Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 el ejercicio de la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho.

**Artículo 4.- Vigencia y derogatoria.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 0004 de 11 de agosto de 2011 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 05 SEP 2017**

**ENRIQUE GIL BOTERO**  
Ministro de Justicia y del Derecho

Elaboró y revisó: Óscar Julián Valencia Loaiza





MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO **1815** DE

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el artículo 1 del Decreto 1338 de 2015, el numeral 13 del artículo 6 del Decreto 1427 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 "Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley".

Que con fundamento en la revisión de la documentación y hoja de vida del doctor **Oscar Mauricio Ceballos Martínez** identificado con cédula de ciudadanía No 1.094.890.577, la Secretaria General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el empleo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad.

Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

**Artículo 1.** Nombrar con carácter ordinario al doctor **Oscar Mauricio Ceballos Martínez** identificado con cédula de ciudadanía No 1.094.890.577 en el empleo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho.

**Artículo 2.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 SEP 2022

NÉSTOR OSUNA PATIÑO

Elaboró: Andrea Trujillo García - Profesional Especializado  
 Revisó: Helen Ortiz Carvajal - Secretaria General  
 Aprobó: Helen Ortiz Carvajal - Secretaria General

 MINJUSTICIA	<b>FORMATO ACTA DE POSESIÓN</b>	CÓDIGO: F-TH-01-02
		VERSIÓN: 02

Acta de Posesión No: 0094

Bogotá D.C., 03 OCT 2022

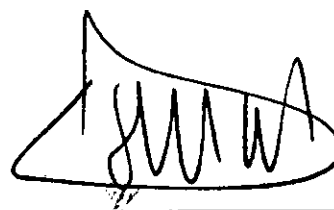
Se presentó en el Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, el doctor **Oscar Mauricio Ceballos Martínez**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.094.890.577 de Armenia (Quindío), con el fin de tomar posesión del empleo denominado Director Técnico, código 0100, grado 22, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, para el cual se nombró con carácter ordinario mediante Resolución No. 1815 del 30 de septiembre de 2022, con una asignación básica mensual de \$ 10.674.969.

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política. Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempeño de empleos públicos establecidas en la Constitución Política y en la legislación vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.7.4 del Decreto 1083 de 2015, solo se exige la presentación de la cédula de ciudadanía.

Oscar M. Ceballos M.

El Posesionado



Quien da Posesión

Elaboró: Angie Camila Berrio Rojas- Judicante Ad Honorem.  
 Revisó: Andrea Trujillo García, Profesional Especializado Gestión Humana.  
 Aprobó: Helen Ortiz Carvajal, Secretaria General.